



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicado: 05001-31-05-021-2021-00133-01
Demandante: Gustavo Adolfo Osorio
Demandada: Eficacia S.A., Industria Nacional de Gaseosas S.A. y
Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A.
Garantía: Seguros del Estado S.A.
Asunto: Apelación de Auto
Procedencia: Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Asunto: Causales de nulidad – Debido proceso – Oportunidad
procesal para la incorporación de pruebas

Medellín, junio quince (15) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Gustavo Adolfo Osorio respecto del auto que resolvió el incidente de nulidad propuesto por el mismo extremo litigioso, proferido el 11 de mayo de 2023 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Gustavo Adolfo Osorio contra Eficacia S.A., la Industria Nacional de Gaseosas S.A. y Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A., y en el que se

llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., conocido con el Radicado 05001-31-05-021-2021-000133-01

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Gustavo Adolfo Osorio instauró demanda ordinaria laboral pretendiendo se declare que sostuvo una relación laboral con Eficacia S.A., regida por un contrato de trabajo de obra o labor determinada, o en subsidio a término indefinido, vigente entre el 07 de marzo de 2013 y el 05 de marzo de 2020, y el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa, con la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, o en subsidio la indexación; y en procura de que se declare que Industria Nacional de Gaseosas S.A. y Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A., son solidariamente responsables respecto del pago de las obligaciones demandadas, y las costas del proceso.

1.2.- CONTESTACIÓN

La sociedad **Eficacia S.A.** se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones aduciendo que la terminación del contrato de trabajo por obra o labor determinada celebrado con el señor Gustavo Adolfo Osorio se produjo por justa causa imputable al trabajador, y de consiguiente excepcionó cumplimiento de las obligaciones laborales; improcedencia de la indemnización por despido injustificado; garantía del derecho al debido proceso en la terminación unilateral con justa causa; improcedencia de la sanción moratoria; improcedencia del pago simultaneo de intereses e indexación; inexistencia de solidaridad; prescripción; buena fe; enriquecimiento sin causa y cobro de lo no debido; compensación; y la genérica o innominada (doc.07, carp.01).

Por su parte, la **Industria Nacional de Gaseosas S.A.** resistió las pretensiones incoadas en su contra, arguyendo que el señor Gustavo Adolfo Osorio no fue trabajador de la empresa, y tampoco se benefició de sus servicios personales. En su

defensa excepcionó cobro de lo no debido por inexistencia del derecho sustancial; inexistencia de la obligación; falta de causa para pedir e improcedencia de solidaridad; prescripción; y buena fe (págs.03-14, doc.08, carp.01).

Adicionalmente, llamó en garantía a la entidad Seguros del Estado S.A. con el fin de que cancele las condenas que eventualmente se profieran a su cargo, con fundamento en la póliza de cumplimiento general tomada por Eficacia S.A. en beneficio de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. (págs15-18, doc.08, carp.01).

La empresa **Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A.**, formuló oposición a las pretensiones arguyendo que no produce, fabrica, distribuye, embotella ni vende los productos de la marca, y que dichas labores son realizadas de forma autónoma por parte de otras empresas independientes, entre ellas la Industria Nacional de Gaseosas S.A.; consecuentemente excepcionó inexistencia de la obligación; y la excepción general (doc.09, carp.01).

Finalmente, **Seguros del Estado S.A.** resistió las pretensiones excepcionando, frente a las pretensiones de la demanda principal, la inexistencia de solidaridad a cargo de la Industria Nacional de Gaseosas S.A.; exclusión de solidaridad entre Eficacia S.A. y la Industria Nacional de Gaseosas S.A.; justa causa para la terminación del contrato de trabajo – ausencia de prueba de incumplimiento contractual por parte de Eficacia S.A.; buena fe; prescripción; y respecto del llamamiento en garantía, la ausencia de cobertura de obligaciones laborales por las que no sea solidariamente responsable la Industria Nacional de Gaseosas S.A.; ausencia de prueba de incumplimiento contractual por parte de Eficacia S.A.; ausencia de cobertura de pago de indemnizaciones laborales; ausencia de cobertura de culpa grave del tomar, asegurado y beneficiario – culpa exclusiva del asegurado; limite y disponibilidad en cobertura del valor asegurado; ausencia de cobertura de los efectos derivados de la declaratoria de contrato realidad contra la Industria Nacional de Gaseosas S.A.; y acción de recobro por cualquier rogación que deba realizar con ocasión de las pólizas de cumplimiento (doc.11, carp.01).

1.3.- INCIDENTE DE NULIDAD

En la audiencia de trámite que se realizó el 11 de mayo de 2023 el apoderado judicial de **Gustavo Adolfo Osorio** impetró incidente de nulidad, con fundamento en la causal 5ª del artículo 133 del Código General del Proceso, contra el auto que ordenó la incorporación de la constancia de inducción al trabajo del demandante (doc.17, carp.01), el manual de mercaderista (doc.18, carp.01), y el perfil del mercaderista (doc.19, carp.01), arguyendo que los referidos documentos fueron aportados después de haberse clausurado el debate probatorio, estando proscrita la reapertura de etapas procesales ya cerradas; porque no fueron solicitados por ninguna de las partes en los escritos de demanda ni contestación, y tampoco fueron allegados por los testigos mientras estaban rindiendo su declaración; documentos de los que se desconoce la fecha de elaboración y autor.

Adicionalmente adujo que, aunque al juez de la causa le asiste la facultad de decretar pruebas de oficio en orden a encontrar la verdad material del caso, bajo la misma no pueden transgredirse los derechos de contradicción, defensa, y debido proceso, ni romperse el equilibrio procesal entre las partes, subsanando las deficiencias probatorias en que hubieren incurrido las partes, relievándose que el juez indujo a los testigos respecto de la incorporación de aquellos documentos (doc.24, carp.01).

1.4.- AUTO DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido en la misma diligencia, declaró no probada la causal de nulidad conjurada, reiterando que le asiste la obligación constitucional de encontrar la verdad del proceso; y que la causal invocada realmente no comprende el supuesto fáctico acontecido en la medida en que no se omitió la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas, sino que se recaudaron las pruebas documentales a las que hizo referencia una de las testigos, las cuales fueron incorporadas transcurrido poco tiempo después de terminada la

declaración, previa advertencia hecha al apoderado de Eficacia S.A. de la necesidad de aportarlas antes de que se instalara la audiencia de juzgamiento.

También sostuvo que la razón legal contundente para justificar la incorporación de dichas pruebas, radica en el artículo 170 del Código General del Proceso, que fija en cabeza del juez el deber-obligación de decretar pruebas de manera oficiosa, hasta antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales de las partes (doc.24, carp.01).

1.5.- RECURSO DE APELACIÓN

El poderhabiente judicial de **Gustavo Adolfo Osorio** impetró los recursos de reposición y en subsidio apelación, en procura de que se declare probada la causal de nulidad invocada, reiterando los argumentos esbozados con la sustentación del incidente de nulidad, relevando que la aducción de los referidos documentos al acervo probatorio no se llevó a cabo en el momento oportuno, resultando irrespetuoso para el debido proceso el desequilibrio introducido por el director del proceso con la incorporación de dichos medios probatorios, subsanando la deficiencia probatoria en la que incurrió el extremo litigioso por pasiva.

Adicionalmente indicó que el debido proceso también se dirige a garantizar el derecho sustancial, sin que el propósito de encontrar la verdad pueda ir en detrimento de uno de los interesados, mucho menos cuando la persona que eventualmente se podría perjudicar es la parte débil de la relación, siendo que la empresa tenía los documentos en su poder, y los incorporó de manera extemporánea (doc.24, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, el vocero judicial de **Gustavo Adolfo Osorio** hizo un recuento de lo acontecido, y reiteró los

argumentos esbozados con la formulación del incidente de nulidad y la sustentación del recurso de apelación (doc.03, carp.02).

Por su parte, el poderhabiente judicial de **Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A.**, solicitó *negar* el recurso de apelación, en la medida en que los artículos 133, 169 y 170 del Código General del Proceso, facultan al Juez para decretar las pruebas de oficio cuando sean útiles para para la verificación de los hechos, y previo a que se emitiera la sentencia el juez de la causa otorgó la oportunidad a los intervinientes de manifestarse en relación con las pruebas allegadas, razón por la cual no le asiste la razón al recurrente (doc.04, carp.02).

Finalmente, el apoderado judicial de **Eficacia S.A.** solicitó que no se declare la nulidad de la incorporación de las pruebas de oficio arguyendo que la causal invocada no se ajusta a lo acaecido en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que no se omitieron oportunidades probatorias, que el ordenamiento procesal no consagra como causal de nulidad el decreto de pruebas de oficio; que no se trasgredió el derecho de contradicción porque el juez de primera instancia corrió traslado sobre los documentos allegados; y que tampoco se vulneró el equilibrio procesal, en la medida en que la finalidad del proceso es encontrar la verdad procesal, y las pruebas le pertenecen al mismo, y no a las partes (doc.05, carp.02).

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por parte de **Gustavo Adolfo Osorio** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y lo previsto en los artículos 65 y 66 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

2.2.- PROBLEMA JURIDICO

Debe determinar la Sala:

¿Si la incorporación oficiosa de pruebas documentales en el transcurso de la audiencia de trámite constituye una omisión de las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o constituye una vulneración al debido proceso de las partes?

2.3.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual con la incorporación de los medios documentales decretados oficiosamente no se omitió la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas, ni se trasgredieron las garantías procesales de las partes, partiendo de la idea de que la búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de decisiones justas.

2.4.- PREMISAS NORMATIVAS

El numeral 5° del artículo 133 del Código General del Proceso establece:

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria”.

Adicionalmente, el artículo 170 del Código General del Proceso prevé:

ARTÍCULO 170. DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia.

Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes”.

En igual sentido, el artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone:

“ARTICULO 54. PRUEBAS DE OFICIO. Además de las pruebas pedidas, el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, la práctica de todas aquéllas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”

La Corte Constitucional ha respaldado la legitimidad y necesidad de las pruebas de oficio, partiendo de la idea de que la búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de decisiones justas:

“El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal. De acuerdo a esta Corporación, el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material; (iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes”
(Sentencia SU-768 de 2014)

Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre el deber del juez de decretar pruebas de oficio, tiene asentado:

“El modelo procesal acogido por la legislación colombiana, que combina los sistemas de actividad probatoria de corte dispositivo e inquisitivo, le otorga al juez el poder de decretar pruebas de oficio para «verificar los hechos alegados por las partes» (núm. 4º art. 37 C.P.C.), constatar «los hechos relacionados con las alegaciones de las partes» (art. 179 C.P.C.) y, específicamente en el proceso laboral, de ordenar «la práctica de todas aquellas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos» (art. 54 del C.P.T. y S.S.) y solicitar «las demás pruebas que considere [el tribunal] necesarias para resolver la apelación o la consulta» (art. 83 del C.P.T. y S.S.).

En el Estado constitucional y democrático de Derecho, donde imperan razones de justicia material (art. 2º y 228 C.P.), las anteriores disposiciones, propias del sistema de actividad probatoria inquisitivo, cobran un especial sentido, pues le imponen al juez el deber de tener iniciativa en la averiguación de la verdad real, para lo cual debe procurar, de oficio, acopiar los elementos de juicio idóneos que le permitan eliminar las dudas fundadas que tenga en torno a los supuestos fácticos del proceso, esclarecer espacios oscuros del pleito y constatar la veracidad de los hechos sometidos a su consideración" (CSJ SL9766-2016, reiterada, entre otras, en las Sentencias SL4902-2021, SL3628-2022).

2.5.- CASO CONCRETO

Ahora bien, conforme a lo indicado en las premisas normativas antes descritas, la causal de nulidad invocada por el recurrente se configura cuando se *omiten* las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, siendo entonces conveniente precisar que la Real Academia de la Lengua Española define el verbo omitir como “*abstenerse de hacer algo*” o “*pasar en silencio algo*”¹, sin embargo, resulta palmario que el supuesto fáctico contemplado en la norma que consagra el efecto jurídico pretendido por el incidentista, realmente no guarda coherencia o similitud con lo sucedido en el proceso de la referencia, siendo que en el trámite del mismo las partes tuvieron la oportunidad de solicitar las pruebas que a bien estimaran, y las mismas no solo fueron decretadas sino también practicadas.

El anterior razonamiento resultaría suficiente para confirmar el proveído en el que se declaró no probada la causal de nulidad invocada, sin embargo, cumple relieves que la parte actora se duele de que cognoscente de instancia condujo a la testigo Zayda Pilar Hernández Zamora para que incorporara las pruebas documentales objeto de controversia, los cuales, por demás, no fueron aportados durante su declaración; pese a ello, la Sala advierte que aunque el conocimiento de la existencia de los referidos medios probatorios devino de las referencias que hizo la testigo, su decreto como prueba para el proceso, se dispuso de manera oficiosa, supuesto procesal que no corresponde al escenario previsto en el numeral 6º del artículo 221 del Código General del Proceso, que prevé “... *el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su*

¹ <https://dle.rae.es/omitir>

declaración”, sino al deber-poder establecido en los artículos 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y 170 del Código General del Proceso antes descritos, derruyéndose el fundamento expuesto por el recurrente en tal sentido.

En igual dirección, el argumento referido a la improcedencia de la incorporación de medios de prueba por haberse decretado la preclusión o clausura del debate probatorio carece de sustento normativo, en la medida en que el artículo 170 del Código General del Proceso, expresamente establece que el juez de la causa puede ejercer el deber-facultad que le asiste de decretar pruebas de oficio, hasta antes de fallar, y en el proceso de la referencia no se había emitido sentencia en el instante en que se ordenó la incorporación de los medios documentales objeto de controversia.

Adicionalmente, esta Corporación considera que con el decreto de las pruebas a las que se ha venido haciendo referencia no se transgredieron los derechos de defensa y debido proceso, en la medida en que el juez de primera instancia las puso en conocimiento de las partes, y tuvo la intención de someterlas a contradicción, viéndose frustrada dicha oportunidad con la interposición del presente incidente de nulidad, circunstancia que no obsta para que una vez el expediente retorne al cognoscente de primer grado, se surta la contradicción correspondiente.

Finalmente, la Sala infiere que el decreto de pruebas oficiosas en el asunto de la referencia tampoco tuvo la vocación de romper el equilibrio procesal entre las partes, porque su decreto provino de las referencias hechas por uno de los testigos, sin que para el efecto se hubiere vislumbrado persuasión, incitación, o inducción indebida por parte del director de la audiencia, o que hubiere tenido el conocimiento privado de la existencia de los referidos documentos.

En la misma línea, ha de recordarse que la finalidad del proceso judicial es la resolución de los conflictos sociales, aplicando el derecho en la forma más justa posible, lo cual se logra en mayor medida si se establece la verdad de los hechos discutidos y a ello deben contribuir los medios probatorios con independencia de que su posterior valoración pueda resultar favorable a una de las partes.

En glosa de lo anterior, lo procedente será confirmar la decisión de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de Gustavo Adolfo Osorio, y en favor de Eficacia S.A., Industria Nacional de Gaseosas S.A. y Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A., se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000 que corresponde un (1) SMLMV, divida en partes iguales.

3.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

RESUELVE:


1.- Se **CONFIRMA** el auto que resolvió el incidente de nulidad propuesto por omitir las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, proferido el 11 de mayo de 2023 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Gustavo Adolfo Osorio contra Eficacia S.A., la Industria Nacional de Gaseosas S.A. y Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A., y en el que se llamó en garantía a Seguros del Estado S.A.


2.- Costas en esta instancia a cargo de Gustavo Adolfo Osorio, y en favor de Eficacia S.A., Industria Nacional de Gaseosas S.A. y Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A., se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000, divida en partes iguales.


3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con lo indicado en el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

El presente auto fue notificado por estado N° 105 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 21 de junio de 2023

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario